

REPUBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE

Auto Interlocutorio

Santiago de Cali, tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2.020)

<b>Radicación No.</b>	76001-33-33-002-2019-00180-00
<b>Medio de control</b>	CUMPLIMIENTO – INCIDENTE SANCIÓN POR DESACATO
<b>Demandante</b>	JOSÉ MANUEL TENORIO CEBALLOS
<b>Demandados</b>	NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
<b>Tema</b>	RECHAZA POR IMPROCEDENTE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO QUE NO SANCIONA POR DESACATO

**Mag. Ponente : FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ**

El accionante formuló recurso de reposición contra el auto adiado 2 de octubre de 2020, a través del cual, se decidió no sancionar por desacato al Dr. Fernando Ruiz Gómez, en su condición de Ministro de Salud y Protección Social, al considerarse que, el Ministro ha adoptado toda clase de medidas positivas tendiente a cumplir la orden judicial de buena fe, pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo, dado que escapa al ámbito de su competencia, la suscripción del aludido proyecto, por parte del Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien es la única cartera ministerial que falta por firmarlo, para proceder a su publicación.

El Despacho rechazará por improcedente el recurso incoado, por las razones que pasan a exponerse:

Los artículos 16 y 29 de la Ley 393 de 1997, disponen que:

**“ARTICULO 16. RECURSOS.** Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente.

...

**ARTICULO 29. DESACATO.** El que incumpla orden judicial proferida con base en la presente Ley, incurrirá en desacato sancionable de conformidad con las normas vigentes, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo Juez mediante trámite incidental; de no ser apelada se consultará con el superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres (3) días siguientes si debe revocar o no la sanción. La apelación o la consulta se hará en el efecto suspensivo. (...).”

En esas condiciones es claro, que en el trámite de la acción de cumplimiento solo procede el recurso de apelación contra la sentencia, y el recurso de reposición contra el auto que niega la práctica de pruebas.

Ahora bien, dentro del trámite incidental solo procede el recurso de apelación contra el auto que sanciona por desacato y en caso que no se apele, dicha decisión deberá ser consultada ante el superior jerárquico, sin que se contemple recurso alguno, contra el auto que decide no sancionar por desacato.

Frente a lo argüido, estableció la Corte Constitucional en sentencia C-542 de 2010 que:

“(…)

7.2.3. Para la Sala, el legislador en ejercicio de la potestad de configurar los trámites judiciales ha considerado en forma razonable que tratándose de un juicio de naturaleza correccional o disciplinario, en el que el Estado ejerce el monopolio del poder punitivo a través de uno de sus agentes (el juez), respecto de quien presuntamente desacata una decisión judicial, persona que puede resultar sancionada por el mismo juez que profirió la orden, al cabo de un incidente procesal breve y sumario, debía conceder al investigado la atribución de apelar el auto sancionatorio o, ante la omisión en la interposición del recurso, disponer darle trámite al grado jurisdiccional de consulta, como una garantía para quien es considerado la parte débil del proceso y en cuyo favor obra la presunción de inocencia.

...

En el asunto que ahora examina la Sala, el legislador no facultó al promotor del incidente para interponer recursos ante la decisión absolutoria, teniendo en cuenta (i) que se trata de un trámite disciplinario en el que el Estado, mediante un juez, decide si hubo o no incumplimiento de una orden impartida por el mismo juez, (ii) no se trata de un proceso contencioso entre el promotor del incidente y el investigado, sino de un trámite correccional que puede concluir con medidas disciplinarias que, según el caso, implican restricción a la libertad individual del sancionado o afectación a su patrimonio, sin que la imposición de éstas medidas garantice *per se* el cumplimiento de la decisión judicial, y (iii) existe diferencia sustancial entre el promotor del incidente de desacato y el investigado, por cuanto el primero da inicio al trámite sin correr el riesgo de ser sancionado; por lo mismo, el legislador no lo facultó para recurrir decisiones que no afectan su libertad personal o su peculio, al paso que, para rodear de mayores garantías al procesado, acordó permitirle en uno de los casos el ejercicio del recurso de apelación (Ley 393 de 1997, art. 29) y en ambos casos dar trámite al grado jurisdiccional de consulta.

...

En concepto de la Sala, las expresiones impugnadas antes que violar las reglas del debido proceso, contribuyen a precisar con antelación y de manera abstracta, cuáles son las garantías que rodean a la persona sancionada al cabo del mencionado incidente. De esta manera, las normas demandadas contribuyen a dar certeza a la decisión del juez, pues con ellas se sabe de antemano que la decisión absolutoria no será susceptible de recursos, aportando al mismo tiempo condiciones para un juzgamiento justo, quedando habilitado el Congreso de la República para modificarlo en el futuro, dentro de los términos precisados por la jurisprudencia.

(…)”.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Unitaria de Decisión,

#### **RESUELVE:**

**1.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE** el recurso de reposición interpuesto por la parte accionante, contra el proveído que decidió no sancionar por desacato al Dr. Fernando Ruiz Gómez, en su condición de Ministro de Salud y Protección Social, acorde con lo explicado en la parte motiva.

**2. ARCHÍVESE** el expediente, previa las anotaciones de rigor.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ**  
Magistrado